

26ª REUNION — 20ª SESION ORDINARIA — 1º DE OCTUBRE DE 1986

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ,
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDISON OTERO

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

ALMENDRA, Ramón A.
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CASTRO, Jorge A.
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LAFFERRIERE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.

MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MURGUÍA, Edgar d. P. V.
NÁPOLI, Antonio O.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
SAADI, Vicente L.
SALIM, Luis
SAPAG, Elías
SIGAL, Humberto C.
VELAZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.
VILLADA, Francisco R.
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES, EN COMISION:

SOLANA Jorge D.
TRILLA, Juan

AUSENTE, CON LICENCIA

CELLI, Felipe

AUSENTES, CON AVISO:

FALSONE, José A.
NIEVES, Rogelio J.
SANCHEZ, Libardo N.

SUMARIO

I. Asuntos entrados:

- I. Comunicación de comisiones. (Pág. 3288.)
 - II. Comunicaciones oficiales. (Pág. 3288.)
 - III. Dictámenes de comisiones. (Pág. 3288.)
 - IV. Peticiones particulares. (Pág. 3288.)
 - V. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita la **habilitación** de una estafeta postal en la localidad de Profundidad, Misiones (S.-757/80). (Pág. 3289.)
 - VI. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita la **construcción** de un edificio para la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 de la ciudad de Apóstoles, Misiones (S.-758/86). (Pág. 3289.)
 - VII. Proyecto de comunicación del señor senador Nápoli por el que se solicita la **reimplantación** del Servicio de Promoción Postal del Libro Argentino (S.-759/86). (Pág. 3289.)
 - VIII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Mathus Escorihuela y Malharro de Torres por el que se solicitan **informes** acerca de la investigación de la Dirección General Impositiva en lo referente a la aplicación y cumplimiento de varias leyes (S. 760/86). (Pág. 3290.)
 - IX. Proyecto de resolución del señor senador Castro por el que se solicitan **informes** acerca de la eliminación de la figura del **general San Martín** de los billetes de papel moneda (S.-761/86). (Pág. 3290.)
 - X. Proyecto de comunicación de los señores senadores Menem y Gómez Centurión por el que se solicitan **informes** acerca de empresas beneficiadas por los regímenes de promoción industrial (S.-762/86). (Pág. 3291.)
2. A moción del señor senador Menem se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor junto con el señor senador Gómez Centurión sobre pedido de informes acerca de las empresas beneficiadas con el **régimen** de promoción industrial no empadronadas ante la Dirección General Impositiva. (S.-762/86). (Pág. 3292.)
 3. Moción de preferencia formulada por el señor senador Rodríguez Saá para considerar en la primera sesión posterior a la del 22 de octubre próximo el proyecto de ley —en revisión— por el que se regula la actividad de los sociólogos. (C.D. 116/86) Se rechaza. (Pág. 3298.)
 4. A pedido del señor senador Britos se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Comunicaciones para un proyecto de ley sobre radio-difusión. (S.-301/85.) (Pág. 3298.)
 5. Moción formulada por el señor senador Martiarena para postergar la preferencia que tenía acordada para la sesión de hoy el tratamiento de la **cuestión de privilegio** promovida por el señor senador Bravo Herrera, hasta la primera sesión que se realice después de la semana próxima. (S.-506/86.) Se aprueba. (Pág. 3299.)
 6. Moción de preferencia formulada por el señor senador Martiarena para considerar en la sesión del 15 de octubre el **proyecto sobre jubilación de docentes** y otro asunto de naturaleza educacional. (S.-167/85, S.-545/84, S.-143/85, S.-690/84 y S.-609/84.) Se aprueba. (Pág. 3299.)
 7. Moción de preferencia formulada por el señor senador León para considerar en la sesión del jueves 23 o en la primera sesión posterior al tratamiento de la ley de defensa, el **dictamen de la Comisión de Comercio** referido a un régimen de protección y defensa del consumidor. (S.-506/85.) Se aprueba. (Pág. 3299.)
 8. A pedido del señor senador de la Rúa se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Recursos Naturales y Ambiente Humano para el proyecto de ley de protección al indígena. (P.E.-6/86.) (Pág. 3300.)
 9. Moción de preferencia formulada por el señor senador Velázquez para considerar en la próxima sesión que realice el cuerpo el **proyecto de ley** en revisión sobre creación de una aduana en Bernardo de Irigoyen. (C.D.-104/86.) Se aprueba. (Pág. 3300.)
 10. Moción formulada por el señor senador Berhongaray para **postergar** la preferencia que tenía acordada para la sesión de hoy el tratamiento del dictamen sobre ley de defensa hasta el miércoles 22 de octubre. (C.D.-84/85, S.-657/86, S.-560/85.) Se aprueba. (Pág. 3300.)
 11. A pedido del señor senador Almendra se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Deportes para el proyecto de ley referido a la práctica del boxeo. (C.D.-198/84.) (Pág. 3301.)
 12. A moción del señor senador Sigal se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión sobre estudios, proyectos, trabajos y obras correspondientes al Complejo Hidroeléctrico Limay Medio. (C.D.-115/86.) (Pág. 3301.)
 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley en revisión por el que se autoriza a la Secretaría de Justicia a celebrar convenios con entidades públicas o privadas que tengan por objeto la **cooperación técnica y financiera** con dicha secretaria. (C.D.-99/86.) Se aprueba. (Pág. 3311.)
 14. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Recursos Naturales y Am-

Sr. Presidente. — En consideración la moción formulada por el señor senador por La Pampa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda postergada la preferencia.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional el Honorable Senado, senador Edilson Otero.

II

PEDIDO DE PRONTO DESPACHO

Sr. Almendra. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Almendra. — Señor presidente: quiero solicitar pronto despacho para un proyecto de ley que ha tenido aprobación de la Honorable Cámara de Diputados. No somos sus autores, pero nos preocupa el hecho de que la iniciativa tenga vencimiento este año si no es tratada. Se refiere a la práctica del boxeo.

No queremos aparecer como responsables —en alguna publicación ya ha estado ocurriendo, especialmente con respecto a senadores de nuestro partido— de estar “cajoneando” dicha ley.

Por esas razones, solicito el pronto despacho de este proyecto.

Sr. Nápoli. — Hace tiempo que estamos estudiando en la Comisión de Deportes este tema al que se ha referido el señor senador Almendra, sobre la ley de boxeo, y estamos requiriendo información al respecto. Viene postergada desde hace un tiempo largo, pero habría que hacer una serie de disquisiciones para examinar en este momento las causales.

De todos modos, nuestro bloque apoya el pedido del señor senador Almendra.

Sr. Presidente (Otero). — Si hay asentimiento, se recomendará a las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Deportes el pronto despacho de este proyecto de ley.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Otero). — Se procederá en consecuencia.

12

COMPLEJO HIDROELECTRICO LIMAY MEDIO

Sr. Presidente (Otero). — Se encuentra en Secretaría, de acuerdo con lo convenido en la

reunión de presidentes de bloque, el proyecto de ley en revisión sobre estudios, proyectos, trabajos y obras correspondientes al Complejo Hidroeléctrico Limay Medio.

Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Sigal. — Señor presidente: estamos por iniciar el tratamiento de un proyecto de verdadero interés nacional, como es este que se refiere a los estudios, proyectos y trabajos del Complejo Hidroeléctrico Limay Medio.

Pichi Picún Leufú, Michihuao y Pantanitos materializan el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo existente entre la central Piedra del Aguila y el lago Ramos Mexía del embalse de El Chocón sobre el río Limay, constituyendo el Complejo Hidroeléctrico Limay Medio.

La zona de influencia de los ríos Limay, Neuquén y Negro, llamada Región del Comahue, puede definirse como un área en la que existe ya la mayoría de los factores necesarios para promover un desarrollo equilibrado de su economía dentro del marco nacional. En efecto, sus posibilidades de riego —estimadas en dos millones de hectáreas— la convertirían en el área más importante de América latina para producciones típicas de clima templado. Su potencial hidroeléctrico, estimado en 4.730.000 kilovatios, es superior a la potencia total instalada en la República Argentina para servicio público.

Sus yacimientos mineros, entre los que se encuentra Sierra Grande —el yacimiento ferrífero más importante del país—, y sus reservas de hidrocarburos en Plaza Huincul y Catriel constituyen un conjunto de recursos de excepcional potencialidad que pueden ser los pilares de la expansión futura de la aludida región.

Pero la existencia en el ámbito regional de divisiones políticas, jurisdiccionales y territoriales plantea cuestiones al respecto entre los organismos técnico-administrativos de las distintas autoridades —a veces entre éstas mismas— de difícil solución.

El aprovechamiento hidroeléctrico de Pichi Picún Leufú se ubica sobre el río Limay a 246 kilómetros de la confluencia con el Neuquén, punto a partir del cual el curso fluye hacia el océano Atlántico con el nombre de río Negro.

El acceso se produce por margen izquierda mediante un camino derivado de la ruta nacional número 237 en un punto distante aproximadamente 12 kilómetros de la localidad de Piedra del Aguila. Para que se tenga una idea aproximada de los kilómetros, diré que la distancia al puerto de Buenos Aires es de alrededor de 1.318 kilómetros; al de Bahía Blanca, de 709, y al de San Antonio Oeste de 578.

Es importante destacar el área de influencia de estos proyectos y de los mercados principales. El destinatario de la producción es el Sistema Interconectado Nacional. El área de atención prioritaria la constituye la Región del Comahue, formada por las provincias del Neuquén y Río Negro y parcialmente La Pampa y Buenos Aires. Sin perjuicio de la prioridad establecida precedentemente, el territorio nacional situado al sur del paralelo 42 tendrá, en cuanto se interconecte al presente proyecto, prioridad con respecto a otras zonas del país en los términos del artículo 11 de la ley 17.574 y de la ley 19.955 que la modifica.

Es importante destacar, señor presidente, que gran parte del material que se incorpora a estas obras proviene de las inmediaciones de las mismas o de la región, mientras que los equipos deberán ser provistos por las áreas industriales del país o del exterior. Los combustibles serán puestos en obra por los distribuidores de YPF.

La fuente más cercana para la provisión de cemento es la localidad de Zapala, en la provincia del Neuquén, donde la capacidad instalada supera en un 200 por ciento el requerimiento de Pichi Picún Leufú.

Buenos Aires y Mendoza constituyen otras fuentes posibles con capacidad instalada muy superior.

La madera para encofrados se obtendrá en la zona promoviendo la instalación de aserraderos que comercialicen el producto.

El acero se obtendrá de las provincias de Buenos Aires —a través de las empresas Somisa y Acindar— y de Mendoza, pero no se excluye la posibilidad de importar algunos elementos especiales.

Los explosivos se fabrican en Azul, provincia de Buenos Aires, y Villa María, provincia de Córdoba.

Los aditivos para hormigón provendrán de la provincia de Buenos Aires.

Los materiales para la construcción del núcleo, filtros y espaldones de la represa, así como los inertes para hormigones, existen en cantidad y calidad suficientes en el emplazamiento de las obras.

Señor presidente: estas son obras de aprovechamiento múltiple y multipropósito. Esto significa que no sólo se visualiza a la central como hidroenergética, sino que también se hacen observaciones generales, consideraciones demográficas, descripciones económicas generales, estudios sobre tenencia y uso de la tierra, sobre cultivos principales, áreas cultivadas, producción y rendimiento agrícolas, ganadería, mine-

ría, sector industrial, industria para procesamiento de productos agrícolas y ganaderos, oferta y demanda de productos agrícolas, mercadeo, energía eléctrica, educación, salud, extensión agrícola, investigación, experimentación, etcétera.

Dije que estas obras son de aprovechamiento multipropósito porque en el contrato que se efectúe con las empresas contratistas, podrán incluirse todas estas cuestiones dentro de los temas a tratar.

El impacto directo e indirecto del ingreso de capitales como resultado de la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico Pichi Picún Leufú, Michihuao y Pantanitos, será beneficioso para la economía local.

Considerando una relación de cuatro a uno para la repercusión indirecta sobre la economía regional, se prevé un ingreso considerable en concepto de salarios, lo cual significará un estímulo importante para las comunidades aledañas.

Los costos indirectos de equipos y materiales de provisión local producirán un gran impacto sobre la economía argentina.

Resulta de fundamental importancia el desarrollo tecnológico posterior originado por la concreción de un proyecto energético nacional, como los de Pichi Picún Leufú, Michihuao y Pantanitos. Las repercusiones serán numerosas, aunque su impacto será acusado principalmente por los profesionales y la industria manufacturera secundaria.

Estos aprovechamientos hidroeléctricos y sus actividades concurrentes, constituirán una importante fuente de trabajo para los habitantes del área de influencia en ambos márgenes del río Limay, así como para los trabajadores provenientes de las obras de Alicurá, Piedra del Aguila, Casa de Piedra, Arroyito y obras menores.

En el caso de Michihuao hay que tener en cuenta que, además del servicio energético, se podrá contar con riego para treinta mil hectáreas y con un gemelo desarrollo agro-industrial. Michihuao se convertirá en un importante polo de desarrollo nacional y en una importante propuesta turística, ya que el embalse conformará un espejo de agua en una superficie aproximada de 227 kilómetros cuadrados: un inmenso lago para disfrutar en medio del gran desierto patagónico.

Hemos dicho antes, y reiteramos ahora, que nos hacemos cargo de las frustraciones históricas de las provincias argentinas, que han visto cómo el drenaje de sus recursos hacia la planicie o región central del país les escatimaba

sus posibilidades de desarrollo. En ese sentido hemos cuidado, a través del artículo 12, de mantener la posibilidad de que las provincias convengan con la Nación todo lo atinente a las obras de aprovechamiento múltiple.

Este artículo 12 constituye una verdadera revolución dentro de este tipo de aprovechamientos hidroenergéticos y de proyectos de concesión hidroeléctrica.

Sostenemos que es necesario que la Nación y las provincias compatibilicen sus intereses, ya que estamos convencidos de que la crisis del funcionamiento del modelo liberal de nuestra economía —que terminó para siempre con la renta agraria en un contexto económico internacionalmente perimido y sin posibilidades para el país— determinó la necesidad de que ahora discutamos qué se va a hacer potencialmente con la renta petrolera y gasífera.

Este debe ser un debate leal entre las provincias y la Nación, que atraviase horizontalmente a los partidos políticos argentinos, porque no se trata de volver a una discusión entre unitarios y federales o entre centralistas y provincialistas, sino de enfrentar la realidad, porque la crisis que soporta la Nación, que se encuentra sometida por los condicionamientos internacionales, es muy fuerte.

Quiero indicar también que parte de este complejo sobre el río Limay tiene vinculación con las conversaciones que han mantenido los presidentes de la Argentina y Brasil y el próximo desarrollo entre los dos países.

Voy a leer el punto c) de las consideraciones que se hicieron en aquel momento: "Todas las tratativas realizadas con el consorcio argentino-brasileño han sido consideradas por los señores presidentes de Argentina y Brasil quienes en el punto 26 de la Declaración de Iguazú firmada el 29 de noviembre de 1985 manifestaron: 'En ese sector ambos mandatarios manifestaron su beneplácito por la firme decisión política de la Argentina de realizar, asociada al Brasil, las obras del aprovechamiento hidroeléctrico de Pichi Picún Leufú. En tal sentido se congratularon de que se encuentren encaminadas las negociaciones relativas al convenio de crédito y al préstamo ofrecidos por el gobierno brasileño, así como las referidas al establecimiento de las bases comerciales y jurídicas del contrato entre Hidronor S.A. y el Consorcio Argentino-Brasileño'".

El punto d) dice: "Posteriormente en el Protocolo N° 8, punto 4, firmado el 29 de julio, por los señores presidentes de Argentina y Brasil, se establece: 'Destacar el avance de las negociaciones tendientes a concretar los instru-

mentos necesarios para la ejecución del aprovechamiento hidroeléctrico de Pichi Picún Leufú, con el objeto de iniciar las obras en el menor tiempo posible durante el año 1987'".

A continuación, señor presidente, voy a indicar el texto de los artículos aceptando las modificaciones que introdujera la Cámara de Diputados a este proyecto de ley: "Artículo 1º: contiene la declaración de interés nacional justificada por la importancia de la concreción de estas obras trascendentes de propósito múltiple, con su efecto reactivante de la economía.

"Se incluye el concepto de 'estudio, proyectos' a la declaración de interés nacional por el caso especial de Pantanitos que hoy figura en estado de 'inventario' como recurso hídrico.

"Artículo 2º: define el Complejo Hidroeléctrico Limay Medio, indicando qué obras lo integran en lo específicamente hidroeléctrico. Se aclara especialmente 'que las obras indicadas constituyen una unidad de proyecto...' y esto implica, en conjunto, el manejo unificado desde el punto de vista técnico en coherencia con las normas emergentes de las leyes 17.574 y 20.050, agregándose el concepto de que este manejo deberá estar coordinado con las provincias de Río Negro y Neuquén.

"Artículo 3º: el objeto central de la ley aparece en el artículo en cuestión, que concordantemente con sus antecedentes legislativos ya mencionados autoriza a Hidronor S.A. a completar los estudios, ya encarados en su mayor parte, otorgándole la concesión para la construcción y explotación de los aprovechamientos de Pichi Picún Leufú y Michihuao y eventualmente Pantanitos y sus respectivos sistemas de transmisión. Este artículo asimismo define el aprovechamiento como de propósito múltiple, pues establece: '...sin perjuicio de las condiciones y cláusulas que complementariamente deberá aprobar el Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 15 y concordantes de la misma ley 15.336'. En efecto, el artículo 15 del citado texto legal dice textualmente: "En las concesiones para aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de jurisdicción nacional (artículo 14, inciso a) - 1), que podrán otorgarse por plazo fijo o por tiempo indeterminado, habrán de establecerse las condiciones y cláusulas siguientes:

"1. El objeto principal de la utilización.

"2. Las normas reglamentarias del uso del agua, y en particular, establecidas en su caso de acuerdo con la autoridad local: las que interesen a la navegación, a la protección contra inundaciones, a la salubridad pública, la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, a

la irrigación, la conservación y la libre circulación de los peces, la protección del paisaje y el desarrollo del turismo.

"En estas normas se deberá tener en cuenta el siguiente orden de prioridad para el uso del agua: la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, el riego y luego la producción de energía eléctrica."

El artículo 4º establece el procedimiento de aprobación de los distintos actos e instrumentos requeridos, autorizando al Poder Ejecutivo a suscribir el contrato de concesión con las cláusulas y condiciones complementarias de la presente ley, para la debida ejecución y explotación de las centrales hidroeléctricas y obras que hagan al propósito múltiple.

El artículo 5º, por cuanto la energía a ser generada por las centrales hidroeléctricas del complejo excede el ámbito provincial y aun el regional, ya que estará interconectada a la Red Nacional de Interconexión Eléctrica, que abastece a casi todo el país, este artículo declara sujetas a jurisdicción nacional las obras. Una larga y pacífica interpretación jurisprudencial doctrinaria y legislativa aplica la cláusula comercial —artículo 67, inciso 12— de la Constitución Nacional al transporte de la energía entre jurisdicciones. Coincidentemente con esa apreciación de que la jurisdicción nacional surge de claros preceptos constitucionales, se da lo mismo para los lugares adyacentes, los embalses y zonas de seguridad operativa.

Conscientes de los conflictos que esto originó en el pasado entre las provincias y las concesionarias, las comisiones incluyeron un párrafo —el segundo del artículo— que indica explícitamente que las provincias conservan sus jurisdicciones siempre que no interfieran con los objetivos de interés nacional que dieron origen a estos emprendimientos. Esto está de acuerdo con la moderna jurisprudencia que hoy sustenta nuestro tribunal supremo.

En el artículo 6º se prevén los tiempos de ejecución para cada aprovechamiento, que están en función de las fechas de entrada en servicio que establezca la Secretaría de Energía en el plan de equipamiento respectivo.

En el artículo 7º se adoptan las precisiones requeridas para la financiación de las obras, que consisten fundamentalmente en la afectación de los recursos de Fondo Chocón-Cerros Colorados-Alicurá, prorrogándose los gravámenes por el artículo 2º de la ley 17.574; los de Fondo Nacional de Grandes Obras Eléctricas —creado por ley 19.287— y los excedentes que resulten de la explotación de obras a cargo de Hidronor.

Según el artículo 8º, se hace extensivo al complejo y a las actividades de Hidronor relativas al mismo, disposiciones de la ley 17.574, y obras en tiempo y forma.

En el artículo 9º se repite para la energía generada por estos aprovechamientos la disposición contenida en la ley 20.050, haciendo extensiva a toda la Patagonia la prioridad para abastecimiento eléctrico, originariamente, como hemos visto, establecido para la región del Comahue.

El artículo 10 establece que las provincias de Río Negro y el Neuquén podrán utilizar las tierras comprendidas entre el límite de la expropiación y el de los embalses —mucho menor en la mayoría de los casos— para forestación y turismo. Esta norma se establece para que no queden sin explotar recursos disponibles y esta utilización deberá ser convenida entre las provincias y el Estado nacional.

El artículo 11 contiene la declaración de utilidad pública y consiguientemente sujetos a expropiación de todos los inmuebles necesarios para las obras, autorizando al Poder Ejecutivo a determinarlo y a Hidronor S.A. a promover los pertinentes juicios. Se ha contemplado en el objeto de la expropiación la factibilidad de aprovechamientos secundarios o conexos a los embalses a fin de salvaguardar la consecución de los múltiples propósitos de las obras.

El artículo 12 estipula la necesidad de un convenio previo al contrato de concesión entre el Estado nacional y las provincias que deberá definir expresamente los puntos desarrollados en los incisos a), b), c), d) y e).

El artículo 13, con la misma modalidad de convenio del anterior, refuerza la necesidad de discutir el uso de cupos de agua para diversas utilidades.

Señor presidente: con esta exposición creo haber delineado rápidamente el contenido de este proyecto de ley, para el que suscito la aprobación en general.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Sapag. — Señor presidente: he escuchado detenidamente las palabras vertidas por el señor senador por Chubut en su brillante exposición, en la que efectuó un detalle muy claro respecto de los beneficios que la ley podría dar a mi provincia y a la de Río Negro.

Pero debo manifestar que durante los diecisiete años que llevamos con Hidronor aprovechando el Limay y el Neuquén, con disposiciones iguales a las explicitadas por el señor senador Sigal, las márgenes de estos ríos permanecen desiertas.

Existen dificultades que, indiscutiblemente, nos obligan a disentir en forma notable con la filosofía de los gobiernos centrales con respecto a la concepción de este tipo de obras.

Nosotros concebimos la obra hidroeléctrica como un motor del desarrollo regional y no simplemente como una obra de generación de energía, como se la considera en la actualidad.

Cuando digo que disintimos con la filosofía del gobierno central, no hago mención expresa al radicalismo, pues estoy obligado a reconocer que la denominada ley Illia, número 16.882, que fue aprobada por unanimidad en este Congreso en 1966, reflejaba en su espíritu la concepción regionalista que este tipo de proyectos tiene en otros países.

La citada ley establecía una participación de los beneficios del orden del 33 por ciento para las provincias del Neuquén y Río Negro para sus tierras áridas, porque eran dueñas del recurso hídrico y a manera de compensación por su uso.

Por otra parte, fijaba como primer objetivo de la represa a construirse, la regulación de los ríos a efectos de evitar los estragos que causaban sus crecidas.

También buscaba extender el regadío a tierras que sólo necesitaban el agua para convertirse en fértiles vergeles.

Por último, produciría energía eléctrica necesaria para alimentar las industrias y servir a las viviendas de la Patria y, principalmente, el engrandecimiento de la Patagonia.

Lamentablemente esta ley fue derogada por el gobierno de facto del general Onganía al amparo de la ley 17.574 —creación de Hidronor S. A.—, que modifica todo el espíritu de la norma anterior, es decir de la excelente ley sancionada por el radicalismo durante el gobierno del doctor Illia.

Es así como el complejo El Chocón-Cerros Colorados se transformó en la actualidad, casi exclusivamente, en productor de energía eléctrica, que abastece a los grandes centros urbanos sin líneas internas para la región que la produce. Las que hay son muy pequeñas.

Es por ello que cabe insistir en que obras como la proyectada necesariamente deben emprenderse con el objetivo fundamental de llevar el desarrollo a una de las zonas más desérticas y postergadas del país, como es la Patagonia.

No deben dejarse de lado otros beneficios que estas obras pueden aportar y que son de elevada significación para la región donde se llevarán a cabo. Si sólo se estuviera buscando producir energía eléctrica para la Capital Federal, el pre-

cio que pagarían las provincias de Neuquén y de Río Negro sería muy alto y poco favor se les estaría haciendo.

Es así como creemos que es necesario definir expresamente al complejo de Limay Medio como de aprovechamiento múltiple, es decir destinado a la regulación de los cursos de agua y sus crecidas, al uso de agua para riego y consumo humano e industrial y a la generación de energía eléctrica.

Asimismo, deberá dejarse claramente establecido el derecho de las provincias involucradas —Río Negro y Neuquén— a la utilización de las aguas con los fines mencionados.

Señor presidente: es indudable que las provincias tienen el dominio y jurisdicción sobre su territorio, lo que implica el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial y los recursos naturales existentes en ellos. Entre estos últimos cabe incluir las aguas, sean éstas fluviales, marítimas o subterráneas.

El artículo 2.340 del Código Civil dispone que son bienes públicos los ríos, sus cauces y las demás aguas que corren por cauces naturales. Como tales pertenecen a los estados provinciales que componen la Nación, según el artículo 2.339.

Conforme a la Constitución Nacional, las provincias sólo han delegado en la Nación su jurisdicción sobre las aguas en orden al comercio y a la navegación y en nada más. El artículo 104 de la Carta Magna determina que las provincias conservan todo el poder no delegado por la misma Constitución al gobierno federal. Como consecuencia, los estados provinciales son los que tienen el derecho exclusivo de legislar sobre el uso y el aprovechamiento de los ríos que corren por su territorio.

Por otro lado, son las provincias las afectadas por estos emprendimientos: se anegan sus tierras fértiles, desaparecen rutas y poblaciones, se modifican sus límites, y sufren el impacto sociológico que las obras conllevan, sin que se busque la forma de paliar esos efectos, aunque no sea más que con la precaución de construir villas temporarias y permanentes en plantas urbanas donde puedan después aprovecharse las viviendas y la infraestructura que queda una vez finalizada la obra. En la práctica estos elementos son destruidos y levantados sin tomar en cuenta el beneficio social que provocarían.

Sin embargo, a pesar de todo ello se pretende ignorar a las provincias en el momento de emprender tales obras, negándoles toda participación en las decisiones que deben tomarse y toda injerencia en temas que las afectan tan directamente. Ni siquiera se consulta a las verdaderas

dueñas de los recursos, que son las que al mismo tiempo sufren los aspectos negativos de aquéllos. Es otro caso más del centralismo con que se pretende gobernar el país, negándose el tan declamado federalismo y haciéndose tabla rasa con los derechos de las provincias reconocidos por la Constitución Nacional.

Como ejemplo de lo que ocurre cuando se margina a las provincias de estas grandes obras, he de expresar que a pesar de los convenios suscritos con Hidronor para la forestación y explotación del perilago de El Chocón, la construcción de un complejo turístico y la explotación agrícola-ganadera de la zona de influencia —que implicaría recuperar miles de hectáreas del territorio del Neuquén— éstos han sido desconocidos hasta ahora por dicha empresa.

Asimismo —y quiero que escuchen bien— del millón de hectáreas que la ley Illia indicaba que debían ser regadas por esta represa, hasta el presente, después de diecisiete años de explotación, sólo se ha logrado hacerlo con menos del uno por ciento de dicha cifra.

Por eso consideramos también que es imprescindible que las provincias involucradas conserven la facultad de participar en los trámites y negociaciones previos a la concesión y en la decisión sobre las condiciones en que se realizará la misma. Si no, corren el grave riesgo de ver frustrados sus anhelos e incumplidos los grandes propósitos que alentaron la realización de la obra.

Sin embargo, señor presidente, a pesar de la certeza de todo lo expresado y de la justicia que encierran los reclamos formulados, no habré de proponer, en este momento, modificaciones al proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados.

La situación económica del país está muy lejos de ser floreciente. Hacen falta más inversiones, más producción, más fuentes de trabajo. El hombre del interior, especialmente, lo necesita para poder seguir subsistiendo. Una obra como la proyectada —a pesar de los defectos que marcamos— siempre crea trabajo para el obrero y da vitalidad al comercio e industria locales, aunque sea en forma temporaria.

No podemos, por ello, demorar más el comienzo de la construcción. Efectuar modificaciones al proyecto en tratamiento obligaría a su devolución a la Cámara de Diputados y dilataría la sanción de la ley, instrumento indispensable para iniciar las obras.

Reservamos por ello las objeciones que acabamos de hacer; las manifestamos a efectos de que esta Cámara y el país comprendan que nos me-

recemos el proyecto. Pero no creemos que sea necesario introducir modificaciones en este momento, ya que una vez sancionado presentaremos un nuevo proyecto proponiendo cambiar lo que consideramos no es justo.

Es por estas razones, señor presidente, que a pesar de reafirmar los principios que he dejado expuestos, adelanto mi voto positivo, en esta oportunidad, al proyecto que estamos tratando sobre tablas.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Sigal. — Pido la palabra para una cuestión reglamentaria.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Sigal. — Señor presidente: cuando anteriormente hice uso de la palabra omití efectuar el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto. Por ello concreto la propuesta en este momento.

Sr. Presidente (Otero). — En consideración el tratamiento sobre tablas solicitadó por el señor senador por Chubut.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (*Lee*):

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1986.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Decláranse de interés nacional los estudios, proyectos, trabajos y obras correspondientes al Complejo Hidroeléctrico Limay Medio.

Art. 2º — El Complejo Hidroeléctrico Limay Medio estará integrado por:

- a) Los aprovechamientos hidroeléctricos de Pichi Picún Leufú, Michihuao y Pantanitos sobre el río Limay, en las provincias de Río Negro y Neuquén;
- b) Los correspondientes sistemas de transmisión hasta su vinculación con la red nacional de interconexión y los centros de consumo que la Secretaría de Energía autorice.

Las obras precedentemente indicadas constituyen una unidad de proyecto, construcción y explotación, sin per-

juicio de las etapas sucesivas y compatibilizadas en su ejecución y puesta en funcionamiento, optimizando la operación de las mismas con las correspondientes a las instalaciones hidroeléctricas del Complejo Alicopá, El Chocón-Cerros Colorados y Arroyito. Todo ello importará, en conjunto, el manejo unificado desde el punto de vista técnico de la cuenca del río Limay, en coordinación con las provincias de Río Negro y Neuquén.

Art. 3º — Autorízase a Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima a realizar y completar los estudios y proyectos, y proceder a la ejecución y explotación de los aprovechamientos e instalaciones definidos en los incisos a) y b) del artículo 2º de la presente ley.

Lo dispuesto en el presente artículo implica el otorgamiento de concesión en los términos del artículo 14, inciso a), de la ley 15.336, sin perjuicio de las condiciones y cláusulas que complementariamente deberá aprobar el Poder Ejecutivo de conformidad al artículo 15 y concordantes de la misma.

Art. 4º — Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima propondrá al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Energía, los estudios y proyectos de las obras e instalaciones definidas en el artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, con sus respectivos presupuestos, planes económicos y de financiación, cronograma de ejecución y puesta en funcionamiento, como asimismo las bases contractuales de la concesión.

El Poder Ejecutivo prestará la aprobación que corresponda con las modificaciones o reformas que estime necesario introducir, quedando facultado para suscribir el contrato de concesión respectivo.

Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima a introducir en los proyectos aprobados aquellas modificaciones o adaptaciones que, sin alterar sus características fundamentales, resulten convenientes para la ejecución del complejo.

Art. 5º — Decláranse sujetas a la jurisdicción nacional las obras hidráulicas y eléctricas integrantes del Complejo Hidroeléctrico Limay Medio que Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima construya y explote, los lugares adyacentes necesarios a tales fines, los embalses que se formen y las zonas de seguridad que resulten necesarias para el mejor aprovechamiento de dichos embalses.

Tal jurisdicción es exclusiva en todo lo atinente a los objetivos de interés nacional del Complejo, manteniendo las provincias de Río Negro y Neuquén todas las potestades jurisdiccionales propias en cuanto no interfieran, directa o indirectamente con tales objetivos.

Art. 6º — En los programas que Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima eleve al Poder Ejecutivo el plan de acción para la ejecución del Complejo Hidroeléctrico Limay Medio deberá prever la entrada en servicio de las turbinas de cada aprovechamiento de conformidad con los requerimientos de demanda de potencia y energía del respectivo plan de equipamiento que elabore la Secretaría de Energía.

Art. 7º — Aféctanse para la ejecución de las obras los excedentes de los recursos provenientes del fondo crea-

do por la ley 17.574, modificada por la ley 20.954, en cuyo objeto quedarán comprendidas las obras mencionadas en el artículo 2º de la presente ley, el que en adelante se denominará Fondo El Chocón-Cerros Colorados-Alicopá-Limay Medio, prorrogándose en consecuencia la vigencia de los gravámenes establecidos en el artículo 2º de la ley 17.574. Complementariamente se afectarán recursos provenientes del fondo creado por la ley 19.287, de conformidad a las imputaciones que el Poder Ejecutivo efectúe en ejercicio de las facultades que esta última norma le otorga. Todos estos recursos integrarán como aporte el capital social de Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima.

La afectación de recursos establecidos en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 22 de la ley 20.954, modificado por el artículo 28 de la ley 21.757. Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima utilizará con la misma finalidad y previa capitalización los excedentes que se generen por el servicio comercial del Complejo El Chocón-Cerros Colorados y por la progresiva puesta en servicio comercial de los complejos Alicopá y Limay Medio.

Art. 8º — Declárase extensivo al Complejo Hidroeléctrico Limay Medio y a las actividades que Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima deba cumplir con respecto al mismo lo dispuesto por los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12 y 15 de la ley 17.574 (modificada y complementada por las leyes 19.955, 17.803 y 17.866) y sus disposiciones reglamentarias en cuanto sean de aplicación a los fines de la presente ley. La exención del impuesto a las ventas se considerará referida al impuesto al valor agregado que lo sustituye.

Art. 9º — Sin perjuicio de la prioridad establecida en el abastecimiento de potencia y energía a la región del Comahue, el territorio nacional situado al sur del paralelo 42, en cuanto se interconecte al Complejo Hidroeléctrico Limay Medio tendrá prioridad en esta materia con respecto a otras zonas del país en los términos del artículo 11 de la ley 17.574 (modificada por la ley 19.955) que se hace extensivo a este supuesto.

Art. 10. — Las provincias de Río Negro y Neuquén podrán utilizar, en los términos del convenio previsto en el artículo 12 de la presente ley, las tierras comprendidas entre el límite de la expropiación y el de los correspondientes embalses, con exclusión de las zonas afectadas a la ejecución de obras principales o complementarias del complejo y de las zonas de seguridad que oportunamente se determinen.

Art. 11. — A los efectos del cumplimiento de la presente ley decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes inmuebles de cuyo uso o dominio fuese necesario disponer para la ejecución de las obras, para la formación de los embalses y otros destinos conexos, interdependientes o correlativos con los anteriormente mencionados. El Poder Ejecutivo queda facultado para determinar la ubicación de los inmuebles previa presentación por el expropiante de planos descriptivos y demás elementos que posibiliten la individualización de los bienes. Autorízase a Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Nor-

patagónica Sociedad Anónima a promover los pertinentes juicios de ocupación temporánea y de expropiación de los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública precedente.

Art. 12. — El contrato de concesión previsto en el artículo 3º de la presente ley, deberá incluir necesariamente:

- a) Estipulaciones relativas al uso del agua que contemple adecuada protección contra accidentes, inundaciones y alteraciones peligrosas para el ecosistema;
- b) Normas relativas a la reubicación de poblaciones, caminos, puentes y obras de infraestructura que resulten afectadas como consecuencia de la ejecución de las obras;
- c) La obligación a cargo de Hidronor S. A. de incluir en los contratos que celebra con terceros vinculados a la construcción de las presas, estipulaciones conducentes a posibilitar la participación de los trabajadores en la aplicación y contralor de las normas vigentes de higiene y seguridad laboral;
- d) Normas relativas al mejor aprovechamiento regional de la disponibilidad de agua y energía que producirán las obras con objeto de promover el desarrollo social, económico e industrial de las provincias de Río Negro y Neuquén;
- e) El estudio interdisciplinario y solución de los problemas sociales que se produjeron en la construcción de las grandes represas.

Todas estas medidas señaladas en los párrafos anteriores serán convenidas entre el Estado nacional y las provincias de Río Negro y Neuquén.

Art. 13. — El Estado nacional y las provincias de Río Negro y Neuquén convendrán la utilización de los cupos de agua necesarios para bebida, usos domésticos, industriales y regadío de las áreas susceptibles de aprovechamiento agropecuario-forestal en cada una de las obras del complejo hidroeléctrico Limay Medio.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.

Sr. Presidente (Otero). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Murguía. — Señor presidente: en oportunidad del tratamiento de este tema en una reunión en la Cámara de Diputados, no fue posible que los hombres del justicialismo pudiéramos expresar nuestro pensamiento.

En cumplimiento de un expreso pedido, en esta ocasión vamos a tratar de adoptar la actitud y encarar el planteo que corresponda con este proyecto tan importante que se está considerando.

Mis palabras se sustentarán en la necesidad de ser coherentes y consecuentes con los más caros principios que venimos haciendo explícitos y reclamando durante años. Me refiero concretamente a hacer efectivos los principios de federalismo, a otorgar una especial prelación al recurso humano por sobre los recursos naturales y de capital, incorporando derechos sociales junto a los regionales y rescatando una experiencia que ha sido frustrante para las provincias, y en especial para los trabajadores en estos emprendimientos de múltiples propósitos.

Si bien apoyamos la idea general del proyecto del Poder Ejecutivo, con algunas de las modificaciones sustanciales introducidas por la Cámara de Diputados, lo cual ha significado un avance importante en relación con el proyecto originario, que no es más que una copia de la ley 20.050 y de su antecedente, la ley 17.574, consideramos que no recoge acabadamente los principios recién indicados y que minimiza los aspectos técnicos, políticos, sociales y laborales, que son de fundamental importancia para dar contenido social, participación e integración a esta democracia que queremos consolidar.

Han transcurrido casi diecinueve años desde que un gobierno de facto derogó la ley 16.882, más conocida como "ley Illia", sancionada por el Congreso Nacional. Con la puesta en vigencia de la ley 17.574 se creó Hidronor S.A., a quien se le otorgó la concesión para la construcción del complejo Chocón-Cerros Colorados. Le sucedió la ley 20.050, por la que otro gobierno de facto otorgó a Hidronor S.A. la concesión para la construcción del complejo Alicopá.

Con esas leyes quedaron atrás los sanos principios de la "ley Illia", que apuntaban esencialmente al desarrollo económico y social de la postergada Patagonia, a través de asentar poblaciones y de hacer participar a las provincias en los beneficios de la explotación del emprendimiento hidroeléctrico.

Fueron diecinueve años de luchas y frustraciones de la comunidad del Comahue y de la Patagonia toda, y ante la afrenta de Hidronor se le dio la espalda a los intereses regionales, a través de una empresa que ante los ojos del país y de la banca aparece —y así lo es— como eficiente. Pero la eficiencia puede servir para la libertad o para la esclavitud; lamentablemente, Hidronor fue eficiente para la esclavitud.

Por eso entendemos que esta posibilidad que nos da la democracia de discutir una ley de concesión no puede ser desaprovechada con tibias incorporaciones de algunos derechos regionales y sociales, sino que debemos concretar

efectivamente la incorporación de todos los derechos conculcados porque ésa es la real voluntad política.

Proponemos para ello un régimen legal que indique que las instalaciones complementarias, accesorias y auxiliares son parte de las obras, de tal modo de conformar realmente un aprovechamiento de carácter múltiple. Es una definición necesaria que se debe realizar.

Experiencias recientes demuestran que no se contempló este aspecto, a pesar de estar en el espíritu y concepto de todos los proyectos. Múltiples propósitos que implican, en una definición legislativa, tal cual se sugiere, que el uso y el aprovechamiento debe ser racional y, básicamente, que el agua, elemento vital y muy valioso para las provincias áridas o semiáridas de la Patagonia, debe ser utilizada a través de todas las facetas posibles y convenientes. Se trata del aprovechamiento integral del recurso hídrico, pero también va más allá del uso del agua, porque nos referimos al uso de la presa.

La mera remisión al artículo 15 de la ley 15.336 no abarca esta definición ni significa que la obra será de aprovechamiento múltiple. De allí nuestra objeción, aclarando que esa remisión ya figuraba en las leyes 17.574 y 20.050, por lo que nada se innova en lo proyectado.

No comulgamos con la idea de aquellos que entienden al federalismo desde una concepción comarcal, como un estado feudal, como si las provincias fueran compartimientos estancos. Creemos en un federalismo que se expresa en la solidaridad con los pueblos de las provincias, con un carácter participativo e integrador, que aspira a un desarrollo armónico del país, en tanto considera que la Nación es un todo indisoluble.

Desde esta óptica, y más allá de una discusión que deberá reservarse para otro momento de la vida nacional, cual es la prioridad de los recursos hidroenergéticos para no generar confrontaciones que dividan y no unen, lo que debe prioritarse en esta circunstancia como hecho que atiende al real reclamo de las provincias está dado por una equitativa distribución regional, funcional y personal de las riquezas y una justa distribución del poder.

Por esta concepción es que no agotamos la participación de las provincias solamente a la suscripción del contrato de concesión como lo contempla este proyecto, sino que extendemos la participación donde realmente interesa a las provincias, o sea al desarrollo total del proyecto ejecutivo de las obras como necesidad del aprovechamiento múltiple del complejo.

Sabido es que cuando se llega a la firma de un contrato de concesión, el proyecto está estudiado y definido.

Creemos que es indispensable, cuando se trata la jurisdicción nacional, para evitar los serios inconvenientes que se han generado entre los gobiernos provinciales y empresas del Estado, aclarar que las provincias se reservan todas las potestades jurisdiccionales y competentes propias no delegadas —incluso las tributarias—, siguiendo los lineamientos de la ley 22.016.

Discrepamos en cuanto se repite textualmente una norma de la ley 20.050: el artículo 9°. Sobre el tema consideramos que la prioridad en el abastecimiento y energía a la región ubicada al sur del paralelo 42° ya debe tener prelación efectiva, y a esta altura deberían estar construyéndose las líneas de transmisión de 500 kV (kilovoltios).

Si reiteramos lo que decía la ley 20.050 en cuanto a que la interconexión se produzca, la norma se torna en meramente enunciativa. Ya es hora de que no sólo miremos hacia el sur, sino de que realicemos y concretemos. Sin energía, sin comunicaciones y sin transportes, el sur no tendrá desarrollo.

Con respecto al artículo 11, nosotros creemos necesario incorporar el agregado que contempla un convenio entre la Nación y las provincias para la expropiación antes del inicio de las obras de todas las tierras que van a ser regadas por las aguas embalsadas, con la finalidad de evitar la especulación. Como antecedente señalamos el artículo 21 de la ley 16.882.

El artículo 12 es de fundamental importancia. Se contemplan derechos regionales, sociales y laborales. Es necesario que por ley definamos el objeto principal de la concesión; que se asegure con respecto a los trabajadores una efectiva participación en la implementación, ordenamiento y control de las normas vigentes de higiene y seguridad laboral e industrial. No basta con posibilitarlo solamente en la etapa del control.

La experiencia nos indica que estas obras han provocado numerosos accidentes; que los grandes conflictos —huelgas en El Chocón, Piedra del Aguila, Alicurá— han encontrado como causas problemas de seguridad y condiciones de trabajo en las obras.

La participación efectiva permitirá la constitución de comisiones tripartistas: comitente, contratistas, obreros, desde el inicio de las obras y en su implementación y posterior control.

Nuestra legislación nacional en materia de prevención de accidentes, y enfermedades profe-

sionales —ley 19.587 y decreto 351/79— se circunscribe a la industria en general, y la de la construcción goza de bastante orfandad.

De esta manera, la alta diversidad de riesgos de la construcción queda sin protección legal y más aún en la situación de las obras de gran envergadura, como la que trata esta ley.

El aislamiento con que muchas veces se realizan estas obras, lejos de controles centrales, facilita el fraude a la seguridad social, la aplicación insuficiente de la ya insuficiente ley, la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, entre otras cosas. Se debe terminar con estos sistemas autocráticos donde los trabajadores no sólo son ajenos y carecen de participación sino que ni siquiera reciben capacitación profesional o específica en prevención de riesgos.

Como está en juego nada menos que la calidad de vida, condiciones de trabajo y la dignidad humana, proponemos la participación efectiva de los trabajadores, que se concretará en órganos participativos para la formulación de políticas y estrategias, así como la evaluación de programas y acciones en el campo de las condiciones y calidad de vida del trabajo.

En concreto, la legislación laboral y social argentina, desarrollada sobre la base de largas y duras luchas de los sectores populares, debe estar presente en este tipo de obras y ser aplicada sin deformaciones ni concesiones.

Otro aspecto clave y complementario resulta ser la abolición de las villas temporarias o transitorias, que fueron justificadas, o aún hoy lo son, sobre balances de costos sin tener en cuenta evaluaciones económicas en cuanto a beneficios por costos de oportunidad que trae aparejada la construcción de viviendas en la zona; el carácter social que debe tener la inversión de capital; que este país reclama justicia social y hay un déficit de más de dos millones de viviendas, por lo que construir villas temporarias para luego demolerlas es una violación de los derechos humanos.

El concepto de villa temporaria —envase descartable, verdadera factoría— es un modelo utilizado a nivel internacional, que ha tenido ventajas sobre todo en los países con una estructura de desarrollo efectivo. Este concepto no tiene verdadera aplicación si no se contempla una planificación del desarrollo en forma integral en un país como el nuestro —como es la Patagonia— que necesita desarrollarse y promover nuevos asentamientos humanos, en lugares donde no existen y se generan los recursos, o asentándolos en poblaciones ya existentes. Se debe se-

guir el modelo de Salto Grande, que no se basó en villas provisorias. Queremos incorporar dos normas para que se imponga y se dé posibilidad de realización al tantas veces declamado desarrollo regional. Se plantea que, como parte de la obra, como parte de la inversión a realizar en estos aprovechamientos múltiples, se contemple un monto no menor del 5 por ciento para obras complementarias.

Se definen ocho ítem sobre los cuales recaerá un determinado porcentaje que se fijará en el contrato de concesión entre Hidronor y las provincias de Río Negro y del Neuquén, sobre la base de estudios y proyectos de las obras complementarias y accesorias.

La creación del Fondo como parte de la inversión y sus destinos se compadece con el principio de una planificación global que tienda a un aprovechamiento integral de los recursos y el concepto social de la inversión que una empresa del Estado debe contemplar cuando realiza una obra pública de tan importantes características. No puede tolerarse que miles de millones de dólares en inversión de obras hidroeléctricas no sirvan para destinar un pequeño porcentaje volcado a los fines propuestos.

Digamos que la norma que se propone encuentra sus antecedentes en el artículo 19, inciso h), de la ley 16.882 y en el artículo 17 de la ley 15.336.

Por último, se debe incorporar el llamado a licitación pública como procedimiento idóneo y transparente para la adjudicación de las distintas obras del complejo, ya sea en el artículo 3º o generar uno nuevo.

No significa poner trabas sino que estimamos como conveniente técnica y políticamente esté procedimiento para permitir no sólo la libre competitividad y un mejor precio por las obras, sino como una forma de garantizar la presencia del empresariado y la industria nacional altamente capacitada para estos emprendimientos, y en la coyuntura que vive el país recuperar esa capacidad ociosa fundamentalmente en el campo de la construcción, que ayudará —obviamente— a la reactivación del aparato productivo, al consumo interno y al ahorro nacional. El mismo criterio se sigue al priorizar la presencia de las empresas e industrias de la región donde se realizarán las obras, como un incentivo más para el desarrollo nacional.

En síntesis, con nuestra propuesta estamos garantizando la presencia efectiva de las provincias, rescatando los derechos regionales, sociales y laborales, y realizando esta obra en el sur pero mirando a la Nación en su conjunto.

Sr. Presidente (Otero). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Otero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Otero). — En consideración en particular.

—Se lee y aprueba el artículo 1º.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. Murguía. — Señor presidente: yo iba a hacer una indicación acerca del artículo 1º.

Sr. Presidente (Otero). — El artículo 1º ya fue votado, señor senador. Usted sabe perfectamente...

Sr. Conchez. — Usted se apura.

Sr. Presidente (Otero). — No me apuro. He visto las manos levantadas, y de ninguna manera me apuro.

Tiene la palabra el señor senador Murguía, pero dejo aclarado que el artículo 1º ha sido votado. Si el resto de los señores senadores accede, podrá hacerse una rectificación de votación.

Sr. Murguía. — Con los conceptos que iba a explicar, señor presidente, iba a señalar en el artículo 1º los propósitos de los señores senadores Sigal y Sapag. El señor senador por Neuquén iba dicho con claridad...

Sr. Presidente (Otero). — Si alguien pide reconsideración...

Sr. Murguía. — Dice "propósito múltiple", y yo quiero proponer el cambio de dos palabras...

Sr. Martiarena. — Pido que se rectifique la votación...

Sr. Sapag. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Sapag. — Señor presidente: en nombre de mi provincia, quiero dirigirme al señor senador Murguía, que en su exposición ha hecho algunas reservas que considero justas y que hago mías. Sin embargo, se trata de una obra que se va a realizar donde no hay medios y es de mucho interés para las provincias de Río Negro y Neuquén. Así, si dilatamos el tratamiento de este proyecto, lo modificamos y esperamos que

vuelva nuevamente de la Cámara de Diputados, ocasionaremos un gran perjuicio a estas provincias.

Por esa razón, propongo que todas las modificaciones —yo también tengo algunas para sugerir— las juntemos en un proyecto posterior a los efectos de modificar la ley que vamos a sancionar esta noche, a fin de permitir que Hidronor empiece la obra mañana, incluso con todos los defectos que tiene.

Ese es el pedido que hago al señor senador Murguía y al bloque justicialista.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el senador por Santa Cruz.

Sr. Murguía. — Señor presidente: he advertido que esta votación no va a ser favorable a mi petición. Lo que pretendo es que las modificaciones que voy a proponer queden registradas de manera que pueda sustentarse el criterio para fundamentar el proyecto de ley que el señor senador propicie y que, sin duda alguna, va a contar con el caluroso aporte de nuestra banca.

—Asentimiento¹.

Sr. Cass. — Queda como una expresión de deseos.

Sr. Presidente (Otero). — Queda constancia de las modificaciones formuladas por el señor senador Murguía.

Sr. Murguía. — Entonces voy a acercarme a la Presidencia el texto para continuar con la votación.

Sr. Presidente (Otero). — Continúa la votación en particular.

—Se leen y aprueban los artículos 2º a 13.

—El artículo 14 es de forma.

Sr. Presidente (Otero). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

13

CONVENIOS DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA

Sr. Presidente (Otero). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley venido en revisión por el que se autoriza a la Secretaría de Justicia a celebrar convenios con entidades pú-

¹ Ver el Apéndice.